

La crisis de Ceuta: una crisis migratoria con consecuencias políticas y geopolíticas

La llegada masiva de migrantes a Ceuta, enclave español en la frontera con Marruecos, evolucionó rápidamente de un incidente migratorio a una importante crisis política, diplomática y de seguridad. Aunque la mayoría de los migrantes regresaron pronto a Marruecos, el episodio generó un intenso debate sobre la gestión fronteriza, la política migratoria y el creciente papel de las redes sociales en la configuración de los flujos migratorios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez — fuerte aliado de los regímenes de Maduro y Petro, Irán (Hezbollah y Hamás), y la Cuba de los Castro— se convirtió en el principal blanco de las críticas. Varios gobiernos europeos acusaron su programa de regularización de migrantes indocumentados de crear un «factor de atracción» migratoria, aunque este se aplica únicamente a personas que ya residen en España y no les concede el derecho a desplazarse o trabajar libremente por toda la Unión Europea.

La controversia puso de manifiesto profundas divisiones entre los Estados miembros de la UE respecto a la política migratoria. También reavivó las tensiones diplomáticas entre España, Marruecos y otros socios internacionales. Mientras Madrid continúa defendiendo un enfoque más humanitario, varios gobiernos europeos reclaman controles fronterizos más estrictos y medidas migratorias más severas. Sánchez también ha enfrentado críticas internacionales más amplias que van más allá de la migración y reflejan disputas geopolíticas de mayor alcance.

Según el excomisario europeo Thierry Breton, Ceuta marca un punto de inflexión. En lugar de una crisis migratoria convencional, la describe como el primer gran «ataque híbrido algorítmico» contra una frontera exterior de la UE. A su juicio, campañas coordinadas de desinformación en Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram movilizaron rápidamente a miles de migrantes en cuestión de horas, demostrando cómo las plataformas digitales pueden convertirse en herramientas estratégicas junto con las fronteras físicas.

En Marruecos, las reacciones han oscilado entre el orgullo nacional, la vergüenza política y la indignación pública por el elevado coste humano. Las autoridades niegan tener responsabilidad directa y culpan a las redes de tráfico de personas y a la desinformación en línea, al tiempo que insisten en que Marruecos no debe convertirse en «el guardián de las fronteras de Europa». No obstante, persisten interrogantes sobre si la presión migratoria fue utilizada como instrumento de negociación diplomática.

En última instancia, la crisis de Ceuta pone de relieve la creciente convergencia entre migración, geopolítica y guerra de la información digital. Expone las divisiones dentro de la Unión Europea, la fragilidad de las relaciones entre España y Marruecos y la creciente influencia de la desinformación en línea sobre las dinámicas migratorias. Más que un incidente fronterizo, Ceuta constituye una advertencia sobre los complejos desafíos que la Unión Europea enfrentará cada vez más al gestionar la migración en la era digital.

La UE y el legado del colonialismo

Uno de los desafíos persistentes de la Unión Europea consiste en conciliar su compromiso con la democracia, la autodeterminación y el derecho internacional con la permanencia de determinados acuerdos territoriales heredados de la época colonial entre algunos de sus Estados miembros. Aunque los imperios coloniales europeos han desaparecido formalmente, varios países europeos continúan ejerciendo soberanía sobre territorios situados fuera de Europa continental, algunos de los cuales siguen sujetos a disputas de soberanía o a debates internacionales sobre descolonización.

Francia mantiene la mayor red de territorios de ultramar. En América del Sur, la Guayana Francesa es un departamento de ultramar y una parte integral tanto de Francia como de la Unión Europea. En el Caribe, Guadalupe, Martinica, San Martín y San Bartolomé mantienen vínculos constitucionales con Francia, mientras que en el océano Índico Reunión y Mayotte permanecen bajo administración francesa. Mayotte resulta especialmente controvertida, ya que Comoras reclama la soberanía sobre la isla y las Naciones Unidas han reafirmado en repetidas ocasiones el principio de integridad territorial de Comoras.

Francia también administra las Islas Dispersas (Îles Éparses) en el canal de Mozambique, reclamadas por Madagascar, Mauricio y Comoras. En el Pacífico, Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa continúan figurando ante las Naciones Unidas como territorios no autónomos, lo que refleja los debates en curso sobre su futuro político y su proceso de descolonización.

España también conserva varios territorios en la costa del norte de África, entre ellos Ceuta, Melilla y enclaves más pequeños como las islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alhucemas. España considera estos territorios partes integrantes de su territorio soberano, mientras que Marruecos los considera vestigios de la expansión colonial europea y continúa reivindicándolos. Aunque estos territorios no están clasificados por las Naciones Unidas como territorios no autónomos, siguen siendo políticamente sensibles y periódicamente generan tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

Otros Estados europeos también conservan territorios vinculados históricamente a la expansión colonial. El Reino de los Países Bajos continúa incluyendo Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, Saba y Sint Eustatius en el Caribe, mientras que el Reino de Dinamarca mantiene la soberanía sobre Groenlandia, que goza de un amplio autogobierno y cuenta con un activo movimiento independentista. Aunque estos territorios generalmente no son considerados colonias conforme al derecho internacional contemporáneo, continúan formando parte de debates más amplios sobre autonomía, representación política y autodeterminación.

El Reino Unido, aunque ya no es miembro de la Unión Europea, ofrece algunos de los ejemplos más destacados de disputas territoriales no resueltas de la época colonial. Las islas Malvinas (Falkland Islands), en el Atlántico Sur, continúan siendo objeto de disputa entre el Reino Unido y Argentina. Argentina considera las islas un caso inconcluso de descolonización, mientras que el Reino Unido subraya el derecho de los habitantes de las islas a determinar su propio futuro político.

De manera similar, Gibraltar continúa siendo objeto de disputa entre el Reino Unido y España, pese a las reiteradas expresiones de su población a favor del mantenimiento de la soberanía británica. Otro caso significativo es el archipiélago de Chagos (Territorio Británico del Océano Índico), reclamado por Mauricio. En 2019, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la administración continuada del territorio por parte del Reino Unido era incompatible con la culminación del proceso de descolonización de Mauricio, posición que posteriormente fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Más allá de los territorios de ultramar, Europa también afronta debates internos sobre soberanía y autodeterminación.

Los movimientos existentes en Cataluña (España), Escocia (Reino Unido), Córcega (Francia), Flandes (Bélgica) y otras regiones demuestran que las cuestiones de identidad política y autonomía siguen siendo relevantes dentro de los propios Estados europeos.

Estos casos difieren fundamentalmente de las disputas coloniales: no se consideran casos de descolonización conforme al derecho internacional, sino debates sobre acuerdos constitucionales, autonomía regional y el derecho de las comunidades a determinar su futuro político. No obstante, plantean cuestiones relacionadas sobre el equilibrio entre integridad territorial, legitimidad democrática y autodeterminación.

Estos ejemplos demuestran que el legado de la expansión europea no ha desaparecido por completo y que las cuestiones de soberanía siguen sin resolverse bajo distintas formas. Algunos territorios han expresado reiteradamente su apoyo a mantener su relación con el Estado europeo que los administra, mientras que otros continúan buscando una mayor autonomía, independencia o reconocimiento de reivindicaciones territoriales disputadas.

Para la Unión Europea, esto plantea un importante desafío normativo. ¿Puede la UE promover de manera coherente la autodeterminación, los derechos humanos y el derecho internacional en el exterior sin realizar un examen crítico de las cuestiones territoriales no resueltas dentro de su propio espacio político? Abordar esta tensión fortalecería la credibilidad de la Unión como actor global comprometido con la gobernanza democrática, la igualdad y un orden internacional basado en normas.

360° Geopolítica.